

## TEMA 40. EL CÓDIGO PENAL Y LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. TRATAMIENTO POLICIAL DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS. LOS DELITOS DE ODIIO.

### 1. EL CODIGO PENAL Y LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

Los delitos contra las personas según el Código Penal, son parte de los delitos más habituales en la estadística de criminalidad.

Los delitos contra las personas son aquellos que se comenten contra la integridad física de una persona o grupo de personas. Lo importante en este tipo de delitos es que producen un daño que puede variar entre una simple lesión (*el delito de lesiones*) o una lesión grave en el individuo (*delito de lesiones graves*) o la muerte de la persona (*delito de asesinato o delito de homicidio*).

Si bien es cierto que el bien protegido en este tipo de delitos es la vida y la integridad física de las personas, hay cierto acuerdo en que los delitos contra las personas buscan proteger la convivencia pacífica de la persona y además, el reproche penal también se extiende a la convivencia de la persona en sociedad. Siendo la persona un elemento indispensable para el conjunto social, los delitos que tiene como resultado la lesión de la víctima o incluso su muerte, se encuentran especialmente penados.

Este grupo de delitos se encuentran descritos, junto con sus penas, en el Libro II, Título I de nuestro Código Penal. Uno de los factores más importantes que determinan la calificación jurídica y, sobre todo, la diferencia entre el delito de homicidio y el delito de asesinato, será el dolo (la intención de ocasionar un mal a una persona).

Una definición sencilla de homicidio sería, la muerte de un hombre por otro, comprendiendo todas sus modalidades y variantes.

Podemos decir, que el asesinato de una persona no es más que una variante del homicidio.

No obstante, conviene hacer referencia a los principales tipos delictivos que el Código Penal establece en relación a los mismos:

## TÍTULO I. Del homicidio y sus formas

### Artículo 138.

1. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años.

2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes casos:

a) cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado 1 del artículo 140, o

b) cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.

### Artículo 139.

1. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1.<sup>a</sup> Con alevosía.

2.<sup>a</sup> Por precio, recompensa o promesa.

3.<sup>a</sup> Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

4.<sup>a</sup> Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.

2. Cuando en un asesinato concurren más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior.

A diferencia de lo que ocurre con el delito de homicidio, no cabe el asesinato imprudente y ello es así no sólo porque el C.P. no contempla ninguna de esas dos modalidades culposas, sino también porque cualquiera de las circunstancias previstas en el art. 139 comporta un ánimo o dolo reforzado de matar que, obviamente, resulta del todo incompatible con una muerte causada por una acción u omisión negligentes.

Alevosía: hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido (art. 22.1º CP). Comporta una carencia o inexistencia de posibilidades de defensa por parte del sujeto pasivo, de ahí que pueda adoptar diversas formas:

1º alevosía de prevalimiento, que concurre en los casos en que el sujeto activo del delito se aprovecha del desvalimiento o indefensión de la víctima – no provocados por el agente – , o cuando la víctima es de corta o avanzada edad, se halla enferma, durmiendo, embriagada, narcotizada o en situación semejante.

2º alevosía inopinada o súbita, que consiste en un ataque súbito e inesperado, ejecutado con total falta de prevención por parte del sujeto pasivo, dado el modo repentino o inopinado de la agresión, ya se encuentre aquél de frente o de espaldas, y siempre que no exista indicio que permita a la víctima presagiar la realidad e inminencia de semejante agresión.

3º alevosía proditoria, caracterizada por el empleo, por parte del sujeto activo, de la emboscada, el acecho, el apostamiento o la asechanza, lo que pone de manifiesto una cierta deliberación y el trazado de un plan delictivo, de modo y manera que el agente se oculta en el lugar propicio a la espera de la víctima.

Precio, recompensa o promesa: supone que el precio (una suma de dinero), la recompensa (cualquier otra gratificación distinta al dinero) o la promesa (la oferta de una entrega futura de dinero o de una recompensa) actúan como instrumento de la inducción.

No basta con que medie un precio, una recompensa o una promesa, sino que es indispensable que cualquiera de esos tres elementos provoque el nacimiento del dolo de matar.

Ensañamiento: aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, en los casos en que la conducta del sujeto activo busca o pretende dos resultados distintos, la muerte y el dolor de la víctima.

Artículo 140.

1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.

2.ª Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.

3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.

2. Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. En este caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 78 bis y en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo.

#### Artículo 142.

1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años.

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años.

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a seis años.

Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años.

2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses.

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses.

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses.

El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Otros de los delitos más relevantes, dentro de los delitos contra las personas, es el delito de lesiones. Sin duda uno de los más habituales en nuestros Juzgados y Tribunales. La razón de lo común del delito es que la lesión se puede producir por infinidad de causas, lo que hace que cualquier persona se pueda ver en procedimiento penal como acusado o como víctima de lesiones. Nuestro Código Penal lo tipifica en Libro I, Título III del artículo 147 al 156 ter. No encontramos ante un delito con un gran desarrollo en nuestro Código Penal.

El delito de lesiones se produce cuando una persona causa a otra una lesión que altere o menoscabe su integridad física (el bien jurídico protegido es el derecho a la integridad física), su salud física general o incluso mental (el delito más complicado de probar por la cantidad de maneras con las que se puede lograr). Debe existir la intención de causar dicha lesión.

Asimismo, vamos a referirnos a lo que dispone el Código Penal a este respecto:

### TÍTULO III. De las lesiones

#### Artículo 147.

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad,

además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

3. El que golpear o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses.

4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Diferencia entre tratamiento médico o quirúrgico y primera asistencia facultativa:

Por tratamiento médico-quirúrgico ha de entenderse cualquier acción curativa, reparadora o paliativa de la lesión sufrida, realizada por un médico u otro profesional sanitario competente.

Por primera asistencia facultativa se entiende el conjunto de medidas tendentes a emitir un diagnóstico y pronóstico del menoscabo sufrido, así como el primer tratamiento esencialmente preventivo de las posibles agravaciones y el seguimiento o vigilancia de la evolución del mismo.

Artículo 148.

Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido:

1.º Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado.

2.º Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía.

3.º Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección.

4.º Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.

5.º Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

#### Artículo 154.

Quienes riñeren entre sí, acometiéndose tumultuariamente, y utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad de las personas, serán castigados por su participación en la riña con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

Con esta modalidad delictiva se evita que la conducta de los grupos generalmente de jóvenes violentos y rivales que se acometen confusamente quede impune. Implica la necesaria existencia de dos bandos de personas relativamente equivalentes en número o fuerzas, ya que la pelea de varios contra uno no es una riña, ni tampoco la de diez o veinte contra dos o tres.

Es necesario que la participación consista en la utilización de medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o la integridad de las personas, con independencia del resultado realmente producido. Se



castiga el hecho de acometerse, imputando sólo la muerte o las lesiones que puedan llegar a producirse a sus autores identificados.

También se exige que la pelea sea tumultuaria, es decir, que intervengan más de dos personas, habiendo confusión de quien ataca a quien, siendo también necesario que se llegue a las manos.

Si la riña originara una alteración del orden público y, el objetivo de los alborotadores fuera el atentar contra la paz pública, sería delito de desórdenes públicos (art. 557 CP).

## 2. TRATAMIENTO POLICIAL DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS.

Cada año desaparecen miles de personas en España, en todo el mundo se hablan de cientos de miles. La mayoría de casos se resuelven en poco tiempo, en España el 99 % de denuncias de las personas desaparecidas son localizadas o aparecen en la primera semana. En algunos de estos casos, el desaparecido no quiere que la policía comunique a sus familiares su paradero.

Pero un uno por ciento de personas no se localizan, representando muchas personas al cabo del año. Los casos de desapariciones de personas, principalmente la de menores de edad, suponen una elevada preocupación a la sociedad, tal como lo demuestra la capacidad de movilización ciudadana que se genera delante de los casos que producen una mayor alarma social, así como el seguimiento exhaustivo que hacen los medios de comunicación.

A parte de estos casos de mayor impacto social, se producen otros menos mediáticos, pero no por eso menos relevante tanto desde el punto de vista humano y policial, desde el ámbito legal y criminal, como desde la perspectiva familiar. Esta ausencia de la persona desaparecida produce dolor y angustia a sus familiares y allegados, además del desespero por la incertidumbre, la falta de noticias y la inseguridad jurídica de no saber.

Una desaparición de larga duración produce un daño al familiar inmenso, según los psicólogos, mayor incluso que la muerte de un familiar. A diferencia de la muerte, en una desaparición sin causa aparente, el familiar no puede realizar el "duelo" necesario en toda pérdida.

Según la psicóloga especializada, Flor Bellver, los desaparecidos no pertenecen ni al mundo de los vivos ni de los muertos, los llama la pérdida ambigua, un trauma que nunca se cierra.

Según Flor Bellver, los familiares viven en una especie de lucha y bipolaridad porque sufren la ausencia física, pero también sienten una gran presencia psicológica del desaparecido y esto desespera.

Unos familiares que viven en continua desesperanza, pero embarcados en una búsqueda probablemente inútil. Esta desesperación los puede llevar a recurrir a falsos detectives, médiums, informadores que sin escrúpulos puedan estafarles sus ahorros.

Con el tiempo, la impotencia de los familiares se acrecienta y el no hacer nada puede crear culpabilidad y una gran ansiedad.

Para un familiar nunca va a ser suficiente la labor policial en la localización de su familiar, no es más cierto que las gestiones en la investigación y/o localización del desaparecido y el trato con los familiares no se estaban realizando con toda la diligencia necesaria.

El 10 de noviembre de 2010, el Congreso de los Diputados aprobaba, por asentimiento, una declaración institucional en la que declaraba el día 9 de marzo como el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente.

Años después, en concreto, el 6 de febrero de 2013 se creó, mediante acuerdo del Pleno del Senado, la Comisión Especial para el estudio de la problemática de las personas desaparecidas sin causa aparente.

En este sentido, dentro de las conclusiones de esta Comisión Especial, se adoptaba la definición de la Recomendación CM/Rec(2009)122 del Consejo de Europa, fechada el 09 de diciembre de 2009, que establece que:

“la persona desaparecida es la persona ausente de su residencia habitual sin motivo conocido o aparente, cuya existencia es motivo de inquietud o bien que su nueva residencia se ignora, dando lugar a la búsqueda en el interés de su propia seguridad y sobre la base del interés familiar o social”.

Por otra parte, la Recomendación R(79)6 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 20 de abril de 1979, relativa a la búsqueda de personas desaparecidas, realiza, en su Anexo, una categorización de las personas desaparecidas, delimitando de esta forma su ámbito de aplicación. En concreto, menciona las siguientes categorías:

- ☐ menores según las legislaciones nacionales o Internacionales cuando sean de aplicación;
- ☐ personas desaparecidas en circunstancias sospechosas y que por las que se pueda temer por su integridad física o moral;
- ☐ personas que hayan podido ser víctimas de un accidente;
- ☐ personas que no pueden valerse por sí mismas en razón de su situación física, mental o de pobreza.
- ☐ personas que han desaparecido presuntamente para eludir su responsabilidad de manutención;
- ☐ miembros de la familia legítima o natural cuyo contacto o paradero haya sido perdido.

En sus conclusiones, la Comisión del Senado adoptó la definición de desaparecido del Consejo de Europa, y consideraba que “el tratamiento de esta problemática ha de hacerse desde una perspectiva global y como una política de Estado”, enumerando a continuación una serie de medidas para mejorar el sistema, así como

“cambios que puedan redundar en beneficio de las víctimas y de sus familias”.

Por otra parte, nuestro Código Civil, en el Título VIII (De la ausencia), aunque utiliza el término desaparecido no define el mismo, sino que se limita a regular y dar forma jurídica a dos instituciones relacionadas con dicha figura, como son la ausencia legal y la declaración de fallecimiento<sup>4</sup>.

En concreto, el artículo 181 del CC expresa lo siguiente en relación a las personas desaparecidas: (...) “desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última residencia, sin haberse tenido en ella más noticias (...)”. Inciso, este último, que nos da ciertos elementos que nos ayudan a configurar una definición al respecto.

De esta forma, en España no existe una definición legal relativa a lo que engloba el término “persona desaparecida”. De ahí que la base de partida sea la establecida por el Consejo de Europa.

Sin embargo, en el ámbito que nos ocupa, el de la seguridad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entienden que “persona desaparecida” es aquélla sobre la que sus familiares, amigos y conocidos no tienen noticias de su paradero y su situación personal, independiente de cuál sea su edad (menor o mayor de edad), su sexo, condición, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social, así como cuál sea el motivo que haya provocado la ausencia del entorno en el que habitualmente se desarrollaba y discurría la vida de dicha persona.

Ahora bien, debido a que la tipología de las desapariciones es muy variada y extensa, parece por ello oportuno establecer una clasificación al objeto de encuadrar de manera esquemática y más ordenada la distinta fenomenología existente.

De esta forma, al ser muchas y diversas las causas o factores que están en el origen de la desaparición de una persona, el tratamiento de este fenómeno tiene que ser regulado y detallado según la tipología y las circunstancias que rodean al hecho de la desaparición.

En este sentido, se ha adoptado la siguiente clasificación de personas desaparecidas, con el fin de aplicar a cada una de ellas el tratamiento policial más adecuado y oportuno. Así, podemos distinguir tres grandes bloques, tomando como referencia de la agrupación la causa que ha motivado el hecho de la desaparición:

1. Desapariciones voluntarias.
2. Desapariciones involuntarias.
3. Desapariciones forzosas.

Asimismo, es preciso poner de manifiesto que dentro de esta tipificación de personas desaparecidas no se incluyen las siguientes modalidades:

- ☐ Sustracción de recién nacidos.
- ☐ Casos incluidos en la Ley de Memoria Histórica
- ☐ Personas afectadas por una Orden de Búsqueda y Captura, a nivel nacional o internacional.

Esta medida se debe a que estos supuestos tienen un tratamiento específico y concreto que se ha venido gestionando desde los poderes públicos de manera diferenciada y específica, debido a las características que las envuelven.

De esta forma, hay que tener presente que las denuncias sobre personas que son reclamadas judicialmente por no comparecer ante una Autoridad Judicial; los penados que tienen que reincorporarse a pernoctar en los centros pertenecientes al sistema de Instituciones Penitenciarias; los extranjeros que llegan a nuestro país para realizar una actividad laboral mediante la celebración de un contrato menor, y una vez finalizado éste desaparecen; y los marineros que sirviéndose de la llegada a puertos nacionales no vuelven a incorporarse a los navíos en los que fueron contratados, no son considerados casos a incluir dentro de la categoría de personas desaparecidas, sino que se circunscriben dentro del ámbito policial de las solicitudes de Averiguación de Domicilio y/o paradero o de las Órdenes de Búsqueda y Captura.

El Centro Nacional de Desaparecidos, creado por el Ministerio del Interior, establece la siguiente clasificación respecto a las personas desaparecidas:

## I. DESAPARICIÓN VOLUNTARIA

Las desapariciones voluntarias se definen como aquéllas que tienen lugar, tal y como su nombre indica, de forma voluntaria. Es decir, la persona que desaparece lo hace sin ningún tipo de condicionante externo que le obligue a tomar esta decisión, y cuya voluntad es no ser hallada o no facilitar información sobre su vida privada, domicilio, u cualquier dato que afecte a su vida personal y del ámbito de la intimidad a los familiares o personas con derecho a conocer sobre su situación o derecho a localizarla.

La motivación y causa de justificación de esta decisión discrecional y facultativa puede venir dada por muy diversas razones, como son las de carácter familiar, personal, sentimental, laboral, económicas u otras muchas.

Las desapariciones voluntarias se pueden, a la vez, subdividir en diferentes grupos, como son:

- ☐ Fugas de personas menores de edad.
- ☐ Fugas de personas menores de edad de los centros de protección
- ☐ Desapariciones intencionadas de personas mayores de edad, y con plena capacidad jurídica y de obrar.

## II. DESAPARICIÓN INVOLUNTARIA

Se catalogan como desapariciones involuntarias aquéllas en las que la persona desaparece por causas externas y ajenas a su voluntad, siempre y cuando dichos motivos no tengan su origen ni estén basados en hechos que revistan indicios racionales de criminalidad. En este apartado, se pueden circunscribir las desapariciones de personas, tanto mayores como menores de edad, que tengan su razón de ser en alguna de las siguientes causas:

- ☐ Sin Causa Aparente. Se comprenden en este apartado las desapariciones que no puede englobarse en ninguno de los demás apartados establecidos. Por lo tanto, se incluirían aquellos casos en los que la persona desaparece y se ausenta de su residencia habitual y se ignora su paradero, no existiendo ningún motivo aparente o conocido para que tal hecho se produzca. De esta forma, la búsqueda de la persona desaparecida viene generada por razones de su propia seguridad o ante la demanda de los familiares o personas allegadas, y por interés social. A posteriori dicha desaparición puede ser calificada como voluntaria, involuntaria de otra naturaleza, o incluso forzosa.



- ☐ Personas con deterioros cognitivos, trastornos mentales, enfermedades neurodegenerativas, personas con discapacidad, etc.
- ☐ Accidentes.
- ☐ Catástrofes provocadas por causas naturales o derivadas de la acción humana (carácter accidental o intencionado).

### III. DESAPARICIÓN FORZOSA

En esta categoría, las desapariciones forzosas, se incluirían aquéllas que están basadas en un hecho delictivo o una actividad criminal, y que afectan tanto a personas menores como mayores de edad.

Al igual que en las tipologías anteriores, ésta se segmenta en diferentes subgrupos, siendo los siguientes:

- ☐ Desapariciones de personas fundadas en un entorno o ámbito delictivo.
- ☐ Sustracción parental de menores de edad (nacional e internacional). ☐ Echados/Expulsados del hogar (menores y personas discapacitadas).

Dentro del primer subtipo de desaparición forzosa, es decir, las desapariciones de personas fundadas en un entorno o ámbito delictivo, se pueden encuadrar diferentes ejemplos de conductas criminales que conllevarían a la ausencia de una persona. Así pues, a modo de ejemplo se podrían citar diversas actividades ilegales como es el secuestro, ser víctimas de las actividades de redes criminales organizadas de trata de seres humanos en todas sus de explotación, la detención ilegal, la adhesión a una secta, etc., como las causantes de la desaparición.

## EL FAMILIAR DE LA PERSONA DESAPARECIDA

En las desapariciones de personas, la víctima se amplía al familiar de la persona desaparecida, como ya se ha explicado en la introducción, el familiar sufre la ausencia del desaparecido y puede ser víctima a la vez del engaño de terceras personas que se quieran aprovechar de esta situación de vulnerabilidad.

Este tratamiento como víctima del familiar del desaparecido, no se producía desde el primero momento de la recogida de la denuncia. Era corriente que al interponer una denuncia en un cuartel o comisaría de policía la respuesta fuera, "deje pasar unas horas o día a ver si aparece la persona antes de poner la denuncia". Existía una leyenda urbana que decía que para poner una denuncia de desaparición había que esperar unas horas, en algunos casos 24, en otros 48... La realidad es que no existe ningún plazo mínimo para interponer una denuncia de desaparición, todo lo contrario, la denuncia se ha de poner desde el primer momento que se considere que la persona ha desaparecido.

Especial interés tienen algunos artículos del Código Civil en relación al tratamiento jurídico de la persona desaparecida:

Artículo 184 Salvo motivo grave apreciado por el Juez, corresponde la representación del declarado ausente, la pesquisa de su persona, la protección y administración de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones: 1. Al cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente o de hecho. 2. Al hijo mayor de edad; si hubiese varios, serán preferidos los que convivían con el ausente y el mayor al menor. 3. Al ascendiente más próximo de menos edad de una u otra línea. 4. A los hermanos mayores de edad que hayan convivido familiarmente con el ausente, con preferencia del mayor sobre el menor. En defecto de las personas expresadas, corresponde en toda

su extensión a la persona solvente de buenos antecedentes que el Juez, oído el Ministerio Fiscal, designe a su prudente arbitrio.

Artículo 186 Los representantes legítimos del declarado ausente comprendidos en los números primero, segundo y tercero del artículo 184 disfrutarán de la posesión temporal del patrimonio del ausente y harán suyos los productos líquidos en la cuantía que el Juez señale, habida consideración al importe de los frutos, rentas y aprovechamientos, número de hijos del ausente y obligaciones alimenticias para con los mismos, cuidados y actuaciones que la representación requiera, afecciones que graven al patrimonio y demás circunstancias de la propia índole.

Los representantes legítimos comprendidos en el número cuarto del expresado artículo disfrutarán, también, de la posesión temporal y harán suyos los frutos, rentas y aprovechamientos en la cuantía que el Juez señale, sin que en ningún caso puedan retener más de los dos tercios de los productos líquidos, reservándose el tercio restante para el ausente, o, en su caso, para sus herederos o causahabientes. Los poseedores temporales de los bienes del ausente no podrán venderlos, gravarlos, hipotecarlos o darlos en prenda, sino en caso de necesidad o utilidad evidente, reconocida y declarada por el Juez, quien, al autorizar dichos actos, determinará el empleo de la cantidad obtenida.

Artículo 193 Procede la declaración de fallecimiento: 1.º Transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del ausente, o, a falta de éstas, desde su desaparición. 2.º Pasados cinco años desde las últimas noticias o, en defecto de éstas, desde su desaparición, si al expirar dicho plazo hubiere cumplido el ausente setenta y cinco años. Los plazos expresados se computarán desde la expiración del año natural en que se tuvieron las últimas noticias, o, en su defecto, del en que ocurrió la desaparición. 3.º Cumplido un

año, contado de fecha a fecha, de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, en que una persona se hubiese encontrado sin haberse tenido, con posterioridad a la violencia, noticias suyas. En caso de siniestro este plazo será de tres meses. Se presume la violencia si en una subversión de orden político o social hubiese desaparecido una persona sin volverse a tener noticias suyas durante el tiempo expresado, siempre que hayan pasado seis meses desde la cesación de la subversión.

Artículo 194 Procede también la declaración de fallecimiento:

1. °. De los que perteneciendo a un contingente armado o unidos a él en calidad de funcionarios auxiliares voluntarios, o en funciones informativas, hayan tomado parte en operaciones de campaña y desaparecido en ellas luego que hayan transcurrido dos años, contados desde la fecha del tratado de paz, y en caso de no haberse concertado, desde la declaración oficial del fin de la guerra.

2.° De los que se encuentren a bordo de una nave naufragada o desaparecidos por inmersión en el mar, si hubieren transcurrido tres meses desde la comprobación del naufragio o de la desaparición sin haberse tenido noticias de aquéllos. Se presume ocurrido el naufragio si el buque no llega a su destino, o si careciendo de punto fijo de arribo, no retornase, luego que en cualquiera de los casos hayan transcurrido seis meses contados desde las últimas noticias recibidas o, por falta de éstas, desde la fecha de salida de la nave del puerto inicial del viaje. 3.° De los que se encuentren a bordo de una aeronave siniestrada, si hubieren transcurrido tres meses desde la comprobación del siniestro, sin haberse tenido noticias de aquéllos o, en caso de haberse encontrado restos humanos, no hubieren podido ser identificados.

### 3. LOS DELITOS DE ODIO.

Desgraciadamente, existen conductas delictivas que motivadas por el odio y la intolerancia, limitan la dignidad y ponen en riesgo la libertad y el desarrollo de las personas en igualdad de condiciones y oportunidades.

Los denominados delitos de odio atentan contra los cimientos del Estado de Derecho y los valores fundacionales de la Unión Europea y por lo tanto los Estados deben reforzar la lucha contra este tipo de delitos.

Recientemente, se ha creado por el Ministerio del Interior, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, que entre otras funciones, va a permitir promover una mejor identificación y registro de los delitos de odio así como una mejor sensibilización en el tratamiento y apoyo a las víctimas.

Podemos considerar delito de odio como cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo con características comunes de sus miembros como su raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar.

En relación con el ordenamiento jurídico español, se han plasmado dos modelos legislativos, con una definición de "delito de odio" con origen en dos modelos doctrinales distintos:

El animus model donde "la sanción del "delito de odio" estaría reafirmando el principio de igualdad entre todas las personas sean cuales sean nuestras condiciones (principio de igualdad in totum)" y

el discriminatory selection model para reforzar la protección de colectivos tradicionalmente discriminados. Partiendo de este marco de conceptualización, se considerarían delitos de odio en nuestro ordenamiento tanto "los delitos cuya responsabilidad penal se agrava por el odio o el prejuicio penal del autor hacia determinada condición personal de su víctima, sea cual sea esta (delitos de discriminación)" como aquellos "cuya responsabilidad penal se agrava porque produce un efecto intimidatorio en el colectivo al cual pertenece la víctima por razón de una de sus concretas condiciones

Comprenden por tanto dos elementos básicos: uno, que el acto constituya una infracción penal; dos, que sea producto de un prejuicio del autor hacia la víctima por pertenecer a un colectivo vulnerable al odio. Es decir, la víctima (o el objetivo) se elige intencionadamente por el autor por su pertenencia (real o presunta) a un colectivo que consideramos desde este punto de vista especialmente protegido.

Por tanto, los elementos distintivos de estos delitos en relación con otros son:

- ☐ Que la víctima tiene una condición simbólica al no ser atacada por ser ella sino por lo que representa, y podría ser ella o cualquier otra que tenga sus mismas características (o aparente tenerlas).
- ☐ La intencionalidad de este tipo de violencia es no sólo atacar a la víctima sino transmitir un mensaje de rechazo, hostilidad e intimidación a todo el colectivo al que pertenece.
- ☐ La participación en este tipo de delitos suele ser múltiple, no se trata de un hecho aislado.

Es necesario subrayar que en nuestro Código Penal no existe una regulación estructurada de los "Delitos de Odio" a través de ningún Título o Capítulo y que tampoco existe una mención definitoria de

“delitos de odio”. Es a partir de una delimitación conceptual que se consideran como delitos de odio en nuestro Código Penal los siguientes:

- ☐ La aplicación de la circunstancia agravante genérica del artículo 22.4 CP.

- ☐ El delito de amenazas dirigidas a atemorizar un grupo étnico, cultural o religioso, o un colectivo social o profesional, o cualquier otro grupo de personas del artículo 170.1 CP.

- ☐ Los delitos contra la integridad moral del artículo 173 CP.

- ☐ El delito contra la discriminación en el ámbito laboral del artículo 314 CP.

- ☐ El delito de incitación al odio, la violencia o la discriminación del artículo 510 CP.

- ☐ Los delitos de denegación discriminatoria de prestaciones o servicios públicos

Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), sólo se denuncian un 10% de los delitos de odio que se cometen. Esta circunstancia dificulta en gran medida la lucha contra estos delitos y causa una gran indefensión a las víctimas.

Los motivos más comunes que hacen que las víctimas no presenten denuncia son:

- ☐ Miedo a sufrir represalias. El miedo a sufrir represalias es un común denominador de las víctimas de delitos de odio. Las graves secuelas de deja en la víctima el delito que ha padecido, cimienta el miedo a volver a ser objeto de nuevas agresiones si interponen denuncia.

☐ Normalización de la violencia y la discriminación. Hay personas que llevan toda la vida siendo víctimas del odio y la discriminación y eso hace que integren esos comportamientos violentos en su vida diaria.

☐ Desconfianza de las Instituciones: Las víctimas piensan que no les harán caso, o que denunciar no servirá de nada. El trato dispensado a las víctimas por las Instituciones es fundamental para generar confianza y que den el paso de interponer la denuncia.

☐ Desconocimiento por parte de las autoridades de la realidad de las víctimas. Este desconocimiento puede dar lugar que no se valoren correctamente las circunstancias que rodean a la víctima a la hora de abordar los hechos denunciados.

☐ Las personas extranjeras en situación irregular temen ser expulsadas del país si acuden a denunciar.

☐ La víctima piensa que si denuncia no la van a creer.

☐ Miedo a revelar intimidad. Hay personas LGTBI que no quieren hacer visible su orientación sexual o su identidad de género al denunciar

☐ Desconocimiento de derechos. Las víctimas no saben dónde y cómo denunciar.

☐ Deficiente ofrecimiento de acciones. El ofrecimiento de acciones posibilita a la víctima ejercer sus derechos en un proceso penal. Debe hacerse en un lenguaje claro y comprensible para personas que desconozcan los términos jurídicos. Si la víctima no entiende la información que se le transmite es probable que no ejercite las acciones legales que le corresponden.

☐ Propensión a considera los hechos como delitos leves. La falta de formación o una deficiente investigación, hacen que no se valoren



todos los bienes jurídicos afectados por la perpetración del delito y por ese motivo, con demasiada frecuencia, hechos constitutivos de delito de odio se consideren delitos leves con el consecuente perjuicio para la víctima. Esta calificación errónea de los hechos denunciados afecta también al colectivo al que la víctima pertenece que pierde confianza en las instituciones